

**PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DEL COMPARTIMENTO FONDO DE LIQUIDEZ
AUTONÓMICO DEL FONDO DE FINANCIACIÓN A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA
EL EJERCICIO 2018**

I. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, de carácter temporal y voluntario, que permite atender las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas, mientras persistan las dificultades de acceso a los mercados financieros. Posteriormente, el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, ha configurado dicho mecanismo como un compartimento del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, conteniéndose en él la normativa aplicable al mismo, al quedar derogado el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio.

Así, en el artículo 22.3 del citado Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, se prevé que dentro de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno que la Comunidad Autónoma adopte debe integrarse el cumplimiento de lo dispuesto en el citado Real Decreto-ley, en los Acuerdos del Consejo de Política fiscal y Financiera, los Acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, así como en el programa que resulte de aplicación, el cual se desarrolla en el presente documento. Todo ello, sin perjuicio de cualquier disposición que desarrolle el mecanismo de financiación.

Por tanto, este programa recoge las características financieras y resto de condiciones aplicables a las operaciones de crédito que el Estado concierte con cada una de las Comunidades Autónomas. Estas condiciones son de carácter general y se aplicarán a todas las Comunidades Autónomas participantes en el compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2018, y siguientes en caso de prorrogarse, sin perjuicio de las condiciones particulares que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (en adelante CDGAE) para la respectiva Comunidad Autónoma.

II. ENTRADA EN VIGOR DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN PARA 2018

Para la aplicación efectiva del presente programa será necesario que cada Comunidad Autónoma se comprometa jurídicamente a cumplir los términos del mismo mediante un acuerdo de su Consejo de Gobierno.

La adhesión a este mecanismo de financiación en 2018 o su continuidad si la Comunidad Autónoma ya se encontraba adherida con anterioridad, supondrá la aceptación por la Comunidad Autónoma, de todas las condiciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el Real

Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los Acuerdos adoptados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos relacionados con este mecanismo, y las condiciones y el procedimiento para la utilización por las Comunidades Autónomas de los recursos procedentes del compartimento fondo de liquidez autonómico contenido en el presente Programa, así como lo previsto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.

Este Programa se incluirá, como anexo, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Autonómico que la Comunidad Autónoma adopte para adherirse al mecanismo o permanecer en él. Igualmente, este Programa resultará de aplicación en el supuesto de que la Comunidad Autónoma se incorpore al mecanismo, en virtud de lo previsto en la Disposición adicional primera, apartado séptimo, de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

III. CONDICIONES FINANCIERAS Y OTRAS CONDICIONES PARTICULARES.

La adhesión a este mecanismo conlleva la aceptación por la Comunidad Autónoma de las condiciones financieras establecidas en los artículos 5 y 24 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, tal y como se desarrollan a continuación:

1. La Comunidad Autónoma se someterá a las **condiciones de prudencia financiera** fijadas por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en los términos que se establezcan para el compartimento Fondo de Liquidez Autonómico.
2. A efectos de la aplicación del **ámbito subjetivo** de este programa se entiende por Comunidad Autónoma la delimitación contenida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, con las particularidades previstas para las propuestas de pagos directos a terceros derivadas de las necesidades de financiación del déficit público o con ocasión de retenciones sobre la financiación otorgada por la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio 2018 para abonar las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

No podrán integrarse en la financiación de este mecanismo operaciones entre los entes integrantes de cada comunidad conforme a la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación anteriormente definido, sin perjuicio de las particularidades previstas en este programa de aplicación. Asimismo, no podrán incluirse operaciones con unidades incluidas en cualquier subsector del Sector

Administraciones Públicas, salvo en los supuestos expresamente previstos en el presente programa.

3. La liquidez otorgada con el mecanismo deberá ser utilizada para atender:
 - a) Los vencimientos correspondientes a los valores emitidos.
 - b) Los vencimientos de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro.
 - c) Los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras residentes.
 - d) Los vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras no residentes.
 - e) Las necesidades de financiación del déficit público, incluyendo las correspondientes a desviaciones de déficit de años anteriores pendientes de financiar.
 - f) El endeudamiento contemplado en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera para financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
 - g) Aquellas operaciones financieras que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

4. Con la finalidad de atender las operaciones señaladas en el apartado anterior, el mecanismo se instrumenta en tres tramos cuyos límites por Comunidad son fijados por Acuerdo de la CDGAE:
 - a. Tramo I relativo a vencimientos que incluye las categorías del punto tercero anterior incluidas en los apartados a), b) c), y d).
 - b. Tramo II, que incluye la categoría incluida en el apartado 3.f) anterior.
 - c. Tramo III: necesidades de financiación del déficit público, incluyendo los intereses asociados a los vencimientos a que se refiere el tramo I y que sean comunicados por la Comunidad Autónoma, con prioridad de pago de estos respecto al resto de conceptos financiados en este tramo III siempre que el importe de los intereses no supere el 15% del importe destinado a financiar el objetivo de déficit del ejercicio 2018. En este tramo se incluye la categoría incluida en el apartado 3.e) anterior.

En caso de que el importe de los intereses asociados a vencimientos y comunicados supere el 15% del importe destinado a financiar el objetivo de déficit del ejercicio 2018, se satisfarán con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico según el siguiente orden de prelación:

1. Los intereses asociados a vencimientos de valores emitidos.
 2. Los intereses asociados a vencimientos de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro.
 3. Los asociados a vencimientos de préstamos concedidos por entidades financieras no residentes.
 4. Los asociados a préstamos concedidos por entidades financieras residentes.
 5. Los asociados a otros instrumentos de deuda PDE.
- d. Las operaciones incluidas en la categoría g) del apartado tercero anterior se incluirán en el tramo correspondiente de los tres anteriores que se acuerde por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dependiendo de la naturaleza de las operaciones que se financien.
- 5. No podrán realizar operaciones instrumentadas en valores, ni operaciones de crédito a largo plazo, salvo previa autorización** expresa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sin perjuicio de la autorización preceptiva del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. La realización de operaciones con instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza estará sujeta a autorización o comunicación, dependiendo de dicha naturaleza, según disponga la **Resolución de prudencia financiera** de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
- 6.** Las condiciones financieras de todas las operaciones de crédito a corto plazo, que no estén sujetas a autorización conforme a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán ser **comunicadas a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera**. Dicha comunicación se acompañará del certificado de la Intervención General de la Comunidad Autónoma o unidad equivalente sobre el cumplimiento de las condiciones financieras.

7. **Los recursos del sistema de financiación** de cada Comunidad Autónoma de régimen común **responderán de las obligaciones contraídas con el Estado** con ocasión de la utilización del Fondo de Liquidez Autonómico.
8. El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará, con cargo al crédito concedido, el pago de los vencimientos de deuda pública de la Comunidad Autónoma, el endeudamiento contemplado en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera para financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, así como los pagos correspondientes a las restantes necesidades de financiación del déficit público, en los términos previstos en el presente Programa, a través del Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos designado al efecto.
9. La Comunidad Autónoma suscribirá la correspondiente **operación de crédito** de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y las condiciones fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que serán debidamente comunicadas, y las condiciones fijadas en este programa.
10. El Estado concertará operaciones de crédito, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, con cada una de las Comunidades Autónomas adheridas al mecanismo, por un importe que no podrá superar los recursos necesarios para atender los vencimientos de la Comunidad Autónoma que se financian con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, las liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, así como las necesidades de financiación del déficit público permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria, con los límites que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
11. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a la vista de la solicitud o comunicación presentada por las Comunidades Autónomas, de su situación financiera, de su perfil de vencimientos y de los flujos financieros del Fondo de Liquidez Autonómico, determinar, para las operaciones de crédito:
 - El tipo de interés aplicable a las operaciones de crédito.
 - El plazo concreto de vencimiento de las operaciones de crédito.
 - En su caso, la procedencia de un periodo de carencia.

- Los períodos de liquidación de intereses y amortización.
- La posibilidad de efectuar cancelaciones anticipadas voluntarias sin penalización.

12. La amortización del principal se realizará respetando el principio de sostenibilidad financiera establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

13. PAGOS DE VENCIMIENTOS (TRAMO I) E INTERESES (TRAMO III)

1. Los pagos por vencimientos de principal e intereses que puedan satisfacerse con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se efectuarán en la forma prevista en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establecerán las condiciones de la operación de crédito que se formalice. En los supuestos en que, excepcionalmente y de forma justificada, el desembolso se realice directamente a la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá requerir certificado trimestral de los vencimientos e intereses satisfechos con dichos recursos así como del respeto de la finalidad y naturaleza de los mismos al ámbito objetivo del FLA. Este certificado se remitirá en el primer mes de cada trimestre del trimestre siguiente al pago que ha de ser objeto de certificación. También se podrá requerir otra documentación justificativa que se considere necesario.
2. La Comunidad Autónoma remitirá una relación certificada por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de los préstamos y otras operaciones contratadas con cláusulas de amortización anticipada, detallando los supuestos de activación de estas cláusulas y sus efectos, y continuará remitiéndolo en cada nueva operación.
3. El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará, con cargo al crédito concedido, **el pago de la cuota de vencimientos de deuda pública** de la Comunidad Autónoma y de los intereses asociados a estos vencimientos, a través del Instituto de Crédito Oficial, con los límites determinados conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre y en su caso, en el Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

14. PAGOS DERIVADOS DE LA ANUALIDAD QUE DEBA SATISFACERSE EN EL EJERCICIO CORRIENTE PARA ABONAR LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY 22/2009 (TRAMO II)

1. La financiación con cargo al compartimento FLA de la anualidad correspondiente a las liquidaciones negativas que debe satisfacerse en el ejercicio corriente en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se abonará a las respectivas Comunidades Autónomas, mensualmente, en los primeros 15 días naturales de cada mes a partir de la efectiva implantación en 2018 del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico para cada Comunidad Autónoma. En el primer mes en que se hagan efectivos los pagos por liquidaciones negativas se abonarán las mensualidades correspondientes a los meses anteriores. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá resolver adelantar las mensualidades pendientes del ejercicio, cuando la Comunidad Autónoma así lo solicite y concurren las circunstancias previstas en el párrafo siguiente y siempre que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad manifieste que la situación de caja del Tesoro así lo permite, lo que determinará la afectación de estos importes a las necesidades comunicadas.

Así, en el caso de que existan cantidades pendientes de pago con entidades vinculadas a sectores estratégicos o servicios fundamentales, cuya atención reporte a la Comunidad Autónoma un efecto directo en la reducción del déficit público, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá, de oficio o a solicitud de la Comunidad Autónoma, adelantar mensualidades pendientes del FLA del ejercicio correspondientes a la cobertura de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, con el fin de satisfacer tales cantidades, abonándose directamente a los titulares del crédito la cantidad fijada, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos y procedimiento establecidos con carácter general en este programa. En la determinación de estas cantidades se tendrá en cuenta la situación de la deuda pendiente con Entidades Locales, a la que se refiere el punto 3 siguiente.

2. En el supuesto de que se den las circunstancias previstas en este programa para la aplicación del control reforzado por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, según lo previsto en apartado IV.6 y IV.7, éste procederá de oficio a aplicar la financiación del FLA asignada para cubrir las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, a la cancelación de las deudas pendientes de pago de la Comunidad, que cumplan los requisitos establecidos en este programa, mediante el abono directo al acreedor. En la determinación de estas cantidades y su destino, por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública se tendrá en cuenta la situación de la deuda pendiente con Entidades Locales, a la que se refiere el punto siguiente, así como la deuda comercial existente y el cumplimiento de los periodos medios de pago por parte de la comunidad.

3. Cuando la Comunidad Autónoma tenga pendiente de pago transferencias a Entidades Locales, anteriores a 31 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará el importe de la financiación con cargo al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico, correspondiente a la cobertura de las liquidaciones negativas 2008 y 2009, que se destinará a satisfacer tales cantidades, abonando directamente a las Entidades Locales la cantidad fijada, de acuerdo con los requisitos y procedimiento establecido, con carácter general, en este programa.

15. PAGOS DE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO VINCULADO A PROVEEDORES Y DETERMINADAS TRANSFERENCIAS (TRAMO III).

1. Las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómico atribuidas a las Comunidades Autónomas para atender las necesidades de financiación del déficit público, excluidos los intereses, únicamente podrán destinarse a la cancelación de deudas pendientes de pago que cumplan las condiciones necesarias para su inclusión en alguna de las categorías enumeradas a continuación y conforme al orden de prelación establecido en este apartado.

Son susceptibles de abonarse pagos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como de los entes y organismos públicos dependientes de aquella, sobre los que se mantenga un poder de decisión sobre su gestión y sus normas internas o estatutos, así como las entidades asociativas en las que participe directa o indirectamente la Administración de la Comunidad. En ambos casos, debe tratarse de entidades incluidas en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades Autónomas, de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional, si bien quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas por la Comunidad Autónoma con entidades que tengan la consideración de Administraciones públicas, en cualquiera de sus subsectores, conforme al ámbito definido por la contabilidad nacional, salvo en los casos previstos en este programa.

- a) **Pago a proveedores**¹. Se entiende por pagos a proveedores, las obligaciones derivadas de cualquiera de las siguientes operaciones de las Comunidades Autónomas, con la delimitación subjetiva señalada en el párrafo anterior:

¹ Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las referencias a estas tipologías se calificarán según la categoría análoga regulada en esta Ley. De igual manera, las referencias contenidas en el presente programa al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se entenderán referidas, para sus contenidos análogos y tras su entrada en vigor, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- i. Contratos de obras, suministros, servicios y gestión de servicios, de concesión de obras públicas y de colaboración entre el sector público y el sector privado.
 - ii. Concesiones administrativas.
 - iii. Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles.
 - iv. Conciertos y convenios educativos y de servicios sociales, así como sanitarios incluidos los suscritos con un hospital público siempre que éste no forme parte del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma proponente del pago.
 - v. Convenios de colaboración a través de los que se instrumenten operaciones que computen en el cálculo del Periodo Medio de Pago a proveedores conforme a lo previsto en el último punto de esta letra. Dentro de estos convenios se identificarán, separadamente, los Convenios con farmacias, colegios de abogados y procuradores.
 - vi. Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración y no se encuentre incluida en el sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma proponente del pago.
 - vii. Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, en concepto de bonificación de las tarifas pagadas por los usuarios por la utilización de un bien o servicio, en la parte financiada por la Comunidad.
 - viii. Resto de operaciones no incluidas en los apartados anteriores que se computen en el cálculo del Periodo Medio de Pago previsto en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, conforme a lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores.
- b) Transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro o ayudas directas a familias otorgadas para el desarrollo de actividades vinculadas con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
- c) Subvenciones, transferencias, así como resto de operaciones con Entidades locales y Universidades. Serán asimilables a las operaciones recogidas en los apartados a) y b), las transferencias a Entidades Locales cuando tengan por finalidad la financiación de servicios públicos fundamentales prestados con medios ajenos a la Entidad Local con arreglo a alguna de las categorías anteriores y quede acreditada esta circunstancia mediante certificación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

- d) La Comunidad Autónoma podrá proponer el pago de otras operaciones distintas de las previstas en los puntos anteriores, permitiéndose las propuestas de pago a entidades sectorizadas como Administraciones Públicas que no formen parte de la definición de la propia Comunidad Autónoma, hasta un máximo del 25% del importe fijado como límite mensual de las propuestas de pago, mediante solicitud expresa al Ministerio de Hacienda y Función Pública, justificando la necesidad de tal solicitud. El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá autorizar dicha propuesta atendiendo a la situación financiera de la Comunidad Autónoma y a la evolución de su periodo medio de pago.

En el ámbito del pago a proveedores, la propuesta formulada por la Comunidad atenderá especialmente a los servicios públicos fundamentales, educación, sanidad y servicios sociales, si bien tendrá en cuenta el cumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad.

No obstante lo anterior, si la Comunidad mantuviera vigentes la aplicación de las medidas comunicadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, previstas en los artículos 18.4, 20.5 o 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá determinar que la propuesta de pago de prioridad al pago de las facturas que superen en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, computados dichos plazos en los términos establecidos en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, comenzando por los servicios públicos fundamentales. De aplicarse dicha priorización, la Comunidad Autónoma podrá solicitar la atención de pagos que no superen en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, previa solicitud al Ministerio de Hacienda y Función Pública y autorización previa por parte de éste.

- 2. Las operaciones relacionadas en el apartado anterior, para estar incluidas en el ámbito material de aplicación, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
 - a) Ser obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, y su factura, factura rectificativa, en su caso, o solicitud de pago equivalente debe haber sido presentada en el registro administrativo de la Comunidad Autónoma o en el Punto general de entrada de facturas electrónicas antes de la formulación de la propuesta de pago por parte de la Comunidad.
 - b) Deben ser facturas devengadas en 2018, o en años anteriores, y encontrarse consignadas en la ejecución presupuestaria o estados contables de la entidad en el momento de la propuesta de pago, no pudiéndose hacer efectivas mediante este mecanismo obligaciones

pendientes de aplicar a presupuesto. Las correspondientes a años anteriores deben estar contabilizadas en el Presupuesto del año correspondiente o en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" o cuenta equivalente del citado año. En este último caso, tendrán que estar aplicadas a presupuesto con anterioridad a la propuesta del pago.

- c) Las obligaciones a atender, que pueden corresponderse con compromisos de pago fraccionados con el acreedor, deben tener una cuantía mínima de 180 €.
3. La puesta en marcha del pago de las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómico atribuidas a las Comunidades Autónomas para atender las necesidades de financiación del déficit público estará sujeta a las siguientes condiciones operativas:
- a) Las disposiciones del Fondo para financiar estas necesidades de liquidez se ajustarán a un calendario por tramos mensuales que se fijarán de acuerdo con lo previsto en la instrucción del Ministerio de Hacienda y Función Pública al Instituto de Crédito Oficial para la formalización de la respectiva operación de crédito.
 - b) Determinados los tramos mensuales, y sin perjuicio de calendarios específicos que se comuniquen por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Comunidad Autónoma remitirá a dicho Ministerio en los primeros 15 días naturales de cada mes de aplicación de este mecanismo, o en su caso en el calendario específico que se haya comunicado, una relación, con firma electrónica autorizada, de las facturas u obligaciones pendientes de pago que conforman la propuesta de pago del tramo al que se refieren. En dicha remisión se incluirán, igualmente, en el caso de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública haya efectuado retenciones sobre los importes relativos a las liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y 2009, los pagos propuestos con destino directo al acreedor de la Comunidad, en los términos previstos en este programa. A la finalización del plazo indicado anteriormente se remitirán la totalidad de las facturas o documentos acreditativos de la obligación de pago existentes en el momento de la remisión y susceptibles de ser atendidas por este mecanismo, por tener su origen en alguna de las operaciones previstas y cumplir con los requisitos exigidos, y que no vayan a ser atendidas a través de la Tesorería ordinaria de Comunidad, salvo que dicha información se pueda obtener por parte del Ministerio de Hacienda y

Función Pública de la interconexión con el registro contable de la comunidad.

- c) Estas relaciones incluirán, al menos, el importe y la fecha de cada factura o documento acreditativo de la obligación de pago, así como la de inicio del cómputo del periodo de pago previsto en Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, la identificación del acreedor actual y, en caso de cesión del crédito, del acreedor originario, el tipo de deuda y la partida presupuestaria o cuenta contable en la que la obligación pendiente de pago está registrada. Dichas relaciones irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el Interventor General de la Comunidad, remitido por vía telemática, que certifique que las propuestas remitidas se ajustan a las condiciones definidas en el presente apartado del programa y en las demás normas y disposiciones que se dicten al respecto, con la información mínima que se prevea en el modelo que, en su caso, se establezca por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que constará al menos el importe de los pagos propuestos por la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las relaciones remitidas, lo cual puede determinar, entre otras consecuencias, la retirada de determinados pagos propuestos en el caso de entenderse que no se ajustan a los requisitos previstos, debiendo adaptarse, en su caso, el certificado remitido por el Interventor General de la Comunidad conforme a la relación definitiva de pagos a tramitar.
- d) De no recibirse el certificado anteriormente señalado en el plazo comunicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública o no resultar el mismo conforme, podrá procederse a la paralización de las órdenes de pago correspondientes hasta su recepción o subsanación, tramitándose en tal caso los pagos correspondientes en el plazo que medie hasta el pago del siguiente tramo mensual, pudiéndose acumular ambas remesas.
- e) Es responsabilidad de las Comunidades Autónomas el cumplimiento de las disposiciones reguladoras del Fondo de Liquidez Autonómico y de su programa en relación a los pagos propuestos y demás necesidades financieras atendidas con el presente mecanismo, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que el Ministerio de Hacienda y Función Pública pueda efectuar.

- f) En ningún caso, la Comunidad Autónoma podrá modificar el orden de prelación establecido sin autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- g) Podrán incluirse en la relación de pagos propuestos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a solicitud de la Comunidad Autónoma, los abonos derivados de sistemas de gestión de pagos en los que el proveedor originario haya cobrado o anticipado la correspondiente contraprestación económica sin posibilidad de recurso contra dicho proveedor. Las propuestas deberán identificar en la plataforma de pagos el proveedor originario, así como el beneficiario actual de la transferencia, debiendo, en todo caso, tramitarse dentro del mismo ejercicio natural el cobro por parte del proveedor y la propuesta de pago al beneficiario actual.
- h) El Ministerio de Hacienda y Función Pública, podrá modificar el orden de prelación de los pagos de las obligaciones pendientes en cada tramo, tomando en consideración, entre otros aspectos, la naturaleza del gasto, la consideración del proveedor o acreedor y el grado de aplicación de las medidas previstas por la Comunidad en el caso de que su periodo medio de pago exceda del plazo máximo de la normativa de morosidad. Para ello se basará en la información señalada en el apartado b del presente punto y en los datos disponibles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la ejecución presupuestaria, deuda comercial, periodos medios de pago y situación de la tesorería de la Comunidad Autónoma, así como de la información contenida en los puntos generales de entrada de facturas y el registro contable de facturas de la comunidad y en los datos remitidos en el marco de los planes de ajuste vigentes para la Comunidad, entre otros. En este supuesto, la relación certificada del Interventor General de la Comunidad Autónoma se ajustará al orden comunicado por el Ministerio.
- i) El Ministerio de Hacienda y Función Pública remitirá antes de fin de mes, o conforme al calendario específico que se haya acordado, la relación al Instituto de Crédito Oficial a fin de que se lleve a cabo desde este organismo el abono directo de las facturas y otras obligaciones de pago presentadas por las Comunidades Autónomas y conforme a las condiciones establecidas por las normas y disposiciones reguladoras de este mecanismo.

- j) Si en algunos de los meses el importe correspondiente al tramo de las necesidades de financiación del déficit público resultara superior al que se hubiera fijado por el Acuerdo correspondiente de la CDGAE, se aplicarían los criterios de priorización anteriormente descritos.
- k) Si en alguno de los meses el importe correspondiente al tramo de las necesidades de financiación del déficit público resultara inferior al que se hubiera fijado por el Acuerdo correspondiente de la CDGAE, se regularizará en el tramo del mes de diciembre. Sin perjuicio de lo anterior, podrán efectuarse uno o varios pagos extraordinarios en el ejercicio siguiente para la aplicación de los importes que, en su caso, no hayan podido resultar debidamente satisfechos por devoluciones de transferencias, o cualesquiera otras causas
- l) Sobre la base del resultado de las comprobaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como atendiendo al estado del suministro de la información a remitir en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y del Título VII de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se podrá limitar el acceso a los siguientes tramos de financiación o la no disposición de importes en sucesivos tramos por la cantidad equivalente a la inclusión de obligaciones pendientes de pago que no cumplieran los requisitos previstos en el presente programa. Igualmente podrá condicionarse el acceso a los siguientes tramos de financiación atendiendo al grado de cumplimiento de los acuerdos de no disponibilidad que se hayan comunicado o acordado en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la LOEPSF, así como atendiendo al cumplimiento de la obligación legal de presentar el correspondiente Plan Económico – Financiero. A estos efectos, el acceso a los tramos de financiación por parte de las Comunidades Autónomas supone la aceptación de remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública la información o documentación solicitada que resulte necesaria para el ejercicio de tales comprobaciones, solventar las incidencias observadas en el suministro de información o dar una adecuada respuesta a la petición de aclaraciones que sobre dicha información se hayan solicitado.

4. La tramitación y propuesta de las relaciones de facturas y obligaciones pendientes de pago se ajustará adicionalmente a las siguientes condiciones:

- a) La información se remitirá por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Hacienda y Función Pública que gestionará dicha información con especial colaboración de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, en particular en cuanto a la gestión de los datos remitidos que podrán alojarse en sus servidores además de en los del propio Ministerio.

- b) Esta información se remitirá al Instituto de Crédito Oficial para su correspondiente tramitación y gestión de los pagos.
- c) La Comunidad Autónoma velará para que la elaboración de la relación de obligaciones pendientes de pago remitidas se realice bajo los principios de objetividad, transparencia e igualdad de trato de los proveedores que se encuentren en la misma situación, así como que dicha solicitud mantiene la debida consistencia con el plan de tesorería y resto de medidas previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cuando el periodo medio de pago supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
- d) Las CCAA facilitarán a los acreedores por medios electrónicos el listado de las obligaciones que vayan a pagarse a través de este mecanismo. Asimismo, en el supuesto de que se haya subcontratado parte de la prestación, y con el fin de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comunidad Autónoma comunicará al subcontratista el abono de la deuda al adjudicatario del contrato quien, de acuerdo con el artículo 227 de esta norma, habrá comunicado a la Administración esta circunstancia con indicación de la parte de la prestación subcontratada y la identidad del subcontratista.
- e) El abono a favor del acreedor de acuerdo con la información facilitada por la Comunidad Autónoma conllevará la extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con el acreedor por el importe satisfecho. La Administración General del Estado que interviene en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma sólo gestionará el pago de estas obligaciones con cargo al crédito concedido y queda exenta de cualquier responsabilidad al respecto.
- f) El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá solicitar a la Comunidad Autónoma, la cual debe proceder a su remisión en el plazo requerido, la documentación e información necesaria para la realización de las actuaciones de comprobación que puedan efectuarse con carácter previo o a posteriori al momento de la tramitación de las propuestas de pago.

5. Para la cobertura de desviaciones en los objetivos de déficit público de ejercicios anteriores pendientes de financiar se atenderán preferentemente las obligaciones pendientes de pago anteriores al ejercicio corriente. En todo caso se cumplirán las estipulaciones del presente programa que resulten de aplicación, y en concreto lo previsto en el presente punto decimoquinto, con la aplicación de los siguientes requisitos adicionales:
- a) Por el importe acordado acumulado en el ejercicio para la financiación de desviaciones de déficit de ejercicios anteriores pendientes de financiar con destino al pago a proveedores, que exceda del importe de la deuda comercial a fin del ejercicio anterior, habrá de certificarse por el interventor general de la comunidad autónoma que la deuda no financiera de carácter no comercial con origen en ejercicios anteriores se ha reducido en el ejercicio corriente al menos en dicho importe, con el límite de la deuda no financiera de carácter no comercial a fin del ejercicio anterior. Esta certificación firmada electrónicamente se remitirá a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, bien en el momento de elevar la propuesta definitiva de facturas en la que el importe acumulado de la financiación de déficit de ejercicios anteriores supere la deuda comercial a fin del ejercicio anterior o en un plazo no superior a dos meses desde dicho momento.
 - b) Los recursos asignados para la financiación de desviaciones de déficit de ejercicios anteriores pendientes de financiar no podrán determinar generaciones de crédito en el presupuesto de la Comunidad Autónoma del ejercicio corriente, salvo hasta el importe resultante de minorar a las obligaciones pendientes de pago resultantes de gastos registradas en cuentas no presupuestarias a fin del ejercicio anterior la suma de aquellas otras generaciones de crédito que se hayan podido instrumentar en el ejercicio corriente con cargo a operaciones financieras y la regularización, en su caso, de mayores generaciones de crédito que en relación a este requisito se hayan tramitado en ejercicios anteriores. Así mismo, el importe de las generaciones de crédito no podrá superar el importe de las cantidades aplicadas a presupuesto procedentes de ejercicios anteriores de dichas cuentas no presupuestarias. Estas circunstancias, o la no instrumentación de las citadas generaciones de crédito, deberán ser acreditadas en la certificación que acompañe a la propuesta de pago por parte del Interventor General de la Comunidad Autónoma o en una certificación posterior firmada electrónicamente en el plazo de 15 días desde la instrumentación de la generación de crédito con origen en los recursos asignados a los que se refiere el presente apartado.

- c) La falta de remisión de las certificaciones del Interventor General o el incumplimiento de los requisitos previstos a los que se hace referencia en las letras anteriores podrá condicionar el acceso a los siguientes tramos mensuales del compartimento del Fondo de Liquidez Autonómico o a la obtención de financiación adicional por desviaciones en el déficit público de años anteriores.
6. Las condiciones particulares y demás requisitos previstos en el presente punto decimoquinto del programa podrán ser objeto de adaptación o actualización por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, mediante Resolución del Secretario de Estado de Hacienda, o por Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

IV. CONDICIONES FISCALES Y OTRAS CONDICIONES PARTICULARES

La aplicación del presente programa conllevará la aceptación por la Comunidad Autónoma de las condiciones fiscales establecidas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y de las condiciones particulares que se transcriben y detallan a continuación:

1. La Comunidad Autónoma que se adhiera a este mecanismo, en el plazo de siete días naturales desde la aprobación del acuerdo de su Consejo de Gobierno u órgano competente, deberá presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuviera en vigor, consistente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública y con el plan económico-financiero o el plan de reequilibrio que, en su caso, hubiera presentado, y que asegure el reembolso de las cantidades aportadas por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Si la Comunidad Autónoma ya tuviera aprobado un plan de ajuste, como consecuencia del acceso a otros mecanismos adicionales establecidos por el Estado conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica, 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán acordarse con el actual Ministerio de Hacienda y Función Pública las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos. El Plan o sus modificaciones se presentarán con el contenido y formato establecido en los modelos normalizados que especifique el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, en todo caso se procederá a la actualización anual del plan de ajuste en vigor de acuerdo al modelo que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El plan de ajuste incluirá un seguimiento de la evolución de las obligaciones pendientes de pago de la Comunidad Autónoma, estableciéndose una vinculación

clara entre la reducción de su saldo y las cuantías percibidas con cargo al Fondo de liquidez.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá solicitar información sobre el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, morosidad y control de la deuda comercial y no financiera en el sector público, a efectos de llevar a cabo un seguimiento riguroso del importe pendiente de pago así como del cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores y de las medidas adoptadas y previstas por la Comunidad, para garantizar el cumplimiento de los plazos citados. Esta información podrá integrarse en los informes que publica mensualmente el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Si a la vista de la información anterior, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, no apreciase una vinculación clara entre la evolución de las deudas con proveedores y acreedores y las cuantías percibidas con cargo al Fondo de liquidez, así como una reducción del periodo medio de pago a proveedores compatible con el cumplimiento de la normativa de morosidad vigente, requerirá a la Comunidad Autónoma la justificación de esta circunstancia y su corrección. En caso de no atenderse el requerimiento, resultará de aplicación el apartado 5 de la disposición adicional primera de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además del resto de la normativa reguladora del Fondo de liquidez Autonómico.

3. Como parte del plan de ajuste, se presentará además de la información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente información, según los modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos que especifique la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local:
 - a) Escenario económico – financiero para el ejercicio corriente y el siguiente, con el detalle de las medidas adoptadas y previstas en materia de gastos e ingresos, así como su calendario de implantación y efectos.
 - b) Información en materia de reordenación y estado de situación del sector público autonómico, con especial referencia a las fundaciones y sociedades vinculadas o dependientes a la Comunidad Autónoma, en los términos que determine dicho Ministerio.
 - c) Cualquier otra información económico-financiera que el Ministerio de Hacienda y Función Pública considere necesaria.

4. El plan de ajuste incluirá, además de las medidas de ingreso y gasto necesarias para cumplir con los objetivos de estabilidad y para garantizar la devolución al Estado de los préstamos del mecanismo de liquidez, el compromiso de avanzar en la reducción del sector público autonómico, suministrando información sobre su dimensión y estructura así como sobre los efectos previstos con las medidas adoptadas en los procesos de reestructuración, la supresión de las barreras o trabas al mercado interior y la eliminación de cargas administrativas para empresas y autónomos, así como cualquier otra reforma estructural destinada a aumentar la competitividad y flexibilidad económica. En particular, el plan de ajuste incorporará adicionalmente los compromisos relativos al cumplimiento de las actuaciones y condiciones establecidas en el Anexo I de este programa.

5. En los cinco primeros días hábiles y en todo caso antes del día quince de cada mes la Comunidad Autónoma enviará al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el contenido y formato establecido en los modelos normalizados que especifique el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la información actualizada sobre el seguimiento y ejecución del plan de ajuste a través de su Intervención General o unidad equivalente. La información relativa al último mes del ejercicio se remitirá antes del 31 de enero del año siguiente, coincidiendo con el plazo para el envío de información sobre ejecución presupuestaria de dicho mes, y será objeto de actualización con anterioridad al 30 de abril.

6. Control reforzado.

Adicionalmente, la remisión mensual sobre la ejecución del Plan de ajuste a remitir por la comunidad autónoma incluirá la siguiente información:

- Detalle del destino de los recursos mensuales asignados a la Comunidad en concepto de recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada comunidad, podrá determinar los gastos por el importe máximo equivalente al de dichos recursos que, con carácter prioritario, tendrán que atenderse por la Comunidad. En todo caso, Ministerio de Hacienda y Función Pública velará por que se respete la obligación constitucional de atender en primer lugar los intereses de la deuda no atendidos por el FLA.

Asimismo el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá fijar la adopción de medidas concretas de contención del gasto público en el supuesto de que se aprecie inconsistencia entre la evolución de los recursos del sistema de financiación y la senda de gasto de la Comunidad, en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2018.

- Análisis sectorial de los pagos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, que incluirá para cada uno de estos sectores:
 - las cantidades pagadas y propuestas de pago tanto a través de la tesorería ordinaria como a través del FLA con identificación de la categoría de contrato en la que se incluyen y la naturaleza económica del gasto.
 - las cantidades pendientes de pago correspondientes tanto a categorías incluidas en el ámbito del FLA como a gastos no financiados a través de este mecanismo, principalmente transferencias a empresas privadas y públicas y a instituciones sin fines de lucro y familias.

- Información sectorial agregada, con el nivel de detalle que determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de los pagos realizados, propuestos y pendientes, relativos a conceptos no incluidos en el FLA y distintos de los señalados en el punto anterior.

- Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecución del gasto público de la comunidad y sus entes dependientes, así como de determinadas líneas de gasto que, por razón de cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad, el Ministerio de Hacienda y Función Pública determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una Comunidad concreta.

En el caso de ser de aplicación lo previsto en este apartado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública procederá, de oficio, a retener la financiación del FLA, destinada a cubrir las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, para atender a la cancelación de las deudas pendientes de pago de la Comunidad, que cumplan los requisitos establecidos en este programa, mediante el abono directo al acreedor. Se atenderá, principalmente, a la cancelación de deudas anteriores a 2018.

Esta retención dejará de practicarse cuando la Comunidad Autónoma quede excluida del control reforzado de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.

En cualquier caso, del destino de los fondos que se satisfagan directamente a las Comunidades Autónomas para financiar las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 se informará, a través del seguimiento mensual del plan de ajuste, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, quien a la vista de esta información podrá determinar la aplicación obligatoria de la financiación a determinados gastos pendientes de pago.

7. Casos de posible exclusión del control reforzado.

El apartado 6, relativo al control reforzado, no será de aplicación a las Comunidades Autónomas adheridas para las que se compruebe que cumplen todas las condiciones siguientes:

- Cumplimiento del objetivo de déficit de 2017, una vez conocido el avance del déficit, el déficit provisional o el definitivo de la Comunidad para 2017 calculado por la IGAE en el marco de las notificaciones a Eurostat previstas en el Protocolo sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE).
- Valoración del Ministerio de Hacienda y Función Pública de no existencia de riesgo de incumplimiento del objetivo de 2018 a lo largo del ejercicio. A estos efectos se realizará un seguimiento del presupuesto aprobado, en sus diferentes fases de ejecución, así como de las operaciones a tener en cuenta en el cálculo del déficit en términos de contabilidad nacional.
- No haberse comunicado la aplicación de las medidas previstas en el artículo 18.4, 20.5 y 20.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por periodos medios de pago excesivos, o de haberse comunicado, haber quedado sin efecto dichas comunicaciones por el cumplimiento de los requisitos previstos legalmente. En todo caso, podrá valorarse, a efectos de no aplicarse la exclusión de control reforzado, la información sobre plazos legales de pago a proveedores y de conformidad con la entrega de bienes o prestaciones de servicios comunicados al Ministerio de Hacienda y Función Pública y situación y evolución de la deuda comercial o deuda no financiera de la Comunidad Autónoma.
- Cumplimiento de las obligaciones de suministro de la información necesaria para el seguimiento de las circunstancias anteriores o de las contenidas en la Orden Ministerial 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, o en el Título VII de la Ley 14/1986, General de Sanidad.

En caso de incumplir alguna de las condiciones anteriores, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá volver a aplicar el control reforzado regulado en el apartado 6 del presente programa.

V. SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. Las Comunidades Autónomas deben **permitir el acceso y remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública la información** prevista en el artículo 25.e) del Real

Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. El envío y captura de esta información se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos.

2. Las Comunidades Autónomas **deben sujetarse a la supervisión** por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública de la adopción y ejecución de las medidas previstas en el plan de ajuste conforme a lo señalado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre.
3. El órgano de control interno de la Comunidad Autónoma garantizará el adecuado registro de las obligaciones enviadas para su pago mediante el FLA en la contabilidad de la Comunidad Autónoma y efectuará los controles y conciliaciones necesarias para evitar que produzcan pagos duplicados a través del FLA y de la Tesorería ordinaria de la Comunidad Autónoma o con otros mecanismos de financiación habilitados. Así mismo, velará por la adecuada aplicación del plan de ajuste, a cuyos efectos realizará cuantas actuaciones sean necesarias y, en su caso, dejará constancia de su no adopción o incumplimiento en la información de seguimiento del correspondiente plan de ajuste que, dentro de los cinco primeros días de cada mes, enviará al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esta información será tenida en cuenta por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el seguimiento de los planes de ajuste.

- En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública **detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento** de las medidas del plan de ajuste, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de su ejecución, pudiendo solicitar a la Intervención General de la Administración del Estado que acuerde las actuaciones necesarias para llevar a cabo una misión de control.
- En todo caso, el cumplimiento de las medidas propuestas condicionará la concesión de los sucesivos tramos de préstamo salvo las cantidades destinadas a cubrir los vencimientos de emisiones en mercados de capitales y de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro y demás préstamos concertados con bancos no nacionales, así como los intereses asociados a estos vencimientos.
- Cuando la Intervención General de la Administración del Estado envíe una misión de control ésta tendrá como objetivo concretar el diagnóstico de la situación financiera de la Comunidad Autónoma en el marco de los compromisos adquiridos en el plan de ajuste, aplicando las técnicas y metodologías de control que se estimen oportunas.
- El órgano de control interno de la Comunidad Autónoma prestará toda la ayuda y colaboración que sea necesaria a la misión de la Intervención General de la

Administración del Estado, que tendrá acceso a la totalidad de la documentación de la Comunidad Autónoma, para el buen desempeño de sus funciones.

- En el plazo máximo de un mes desde que se inicie la misión de control, la Intervención General de la Administración del Estado emitirá un informe sobre la adecuación financiera de las previsiones recogidas en el plan de ajuste en vigor y los incumplimientos o riesgos de incumplimiento del mismo.
- Dicho informe será remitido al Ministro de Hacienda y Función Pública a los efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- La falta de remisión, o la valoración desfavorable del plan de ajuste darán lugar a la inadmisión de la adhesión al compartimento o, en su caso, la suspensión de su participación en el mecanismo. La falta de actualización del plan de ajuste, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de información detalladas en este programa, así como cualquier otro incumplimiento del plan de ajuste dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

VI. TEMPORALIDAD.

El presente programa se incluirá como anexo de los Acuerdos de Consejo de Gobierno autonómicos para la adhesión o permanencia en el mecanismo y compromete a las Comunidades Autónomas que se hayan adherido a este mecanismo. En ejercicios posteriores al 2018, este programa mantendrá su vigencia pero podrá ser revisado o ampliado, comprometiéndose las Comunidades Autónomas, en este caso, a adoptar un nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno u órgano competente.

**ANEXO I. COMPROMISO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS
ACTUACIONES Y CONDICIONES SEGÚN LO PREVISTO EN EL PUNTO IV.4 DEL
PROGRAMA DE APLICACIÓN**

1. Buenas prácticas en materia de gestión económica y presupuestaria. Entre otras, las Comunidades Autónomas se comprometen a derogar normas de gestión económico-presupuestarias que puedan ser contrarias a los principios del presupuesto.
2. Compromiso de las CCAA a participar en el grupo de trabajo, creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para la racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público autonómico. Las Comunidades Autónomas que se adhieran al Fondo se comprometen a implantar en sus respectivas administraciones las conclusiones que adopte el grupo de trabajo.
3. Compromiso de adoptar las medidas que se acuerden en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera creado por el Acuerdo 3/2013, de 21 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de creación del grupo de trabajo para la elaboración de un programa de racionalización administrativa. Este grupo elaborará un programa de racionalización administrativa que contendrá una serie de medidas seleccionadas del Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, para que sean aplicadas por las Comunidades Autónomas.
4. Compromiso de adoptar las medidas necesarias para su adhesión a los acuerdos marco y sistemas de adquisición centralizada que pueda desarrollar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la justificación aportada de las causas por las que se considera improcedente su adhesión.
5. Compromiso de adoptar las actuaciones necesarias para su adhesión a las demás medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que hayan sido informadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y a no aprobar una cartera de servicios complementaria, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la justificación aportada de las causas por las que se considera improcedente la aplicación de tales medidas o la no aprobación de una cartera de servicios complementaria.

6. Adhesión al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y a la plataforma Emprende en tres, siendo de aplicación las siguientes condiciones:
- a) Completarse el correspondiente directorio con los códigos relativos a la Oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, así como completar el resto de trámites necesarios para permitir la presentación efectiva de facturas electrónicas en FACe.
 - b) Compromiso de no discriminación del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, en relación al punto autonómico, por lo que se deberá poder usar aquél para facturar a todo el ámbito territorial de la CCAA.
 - c) Permitirse el uso del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado para todo el sector administrativo, sanitario y educacional.
 - d) Conexión de los registros contables con FACe, de tal forma que la Comunidad Autónoma deberá conectar su registro contable directamente con el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe). De esta manera, deberá remitirse, simultáneamente a su apunte en su registro contable, información de todas sus facturas, presentadas en papel o en formato electrónico con independencia del Punto en el que se hayan presentado, que consten anotadas en dicho registro. Igualmente deberán informar diariamente desde el registro contable a FACe del estado de tramitación de cada factura recibida en dicho registro contable con independencia del Punto en el que se hayan presentado.
 - e) En relación a la plataforma Emprende en 3 compromiso de completar los trámites necesarios para permitir la presentación efectiva de declaraciones responsables, comunicaciones y solicitudes de autorizaciones o licencias.
7. Compromiso de adhesión al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las Comunidades Autónomas, previsto en el artículo 113 de la Ley 14/1986, general de sanidad. La Comunidad Autónoma, conforme al artículo 113 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, habrá de adoptar un Acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que conste su compromiso de adhesión al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario y su compromiso de cumplir con lo previsto en el Título VII de la citada Ley General de Sanidad.

8. Compromiso de que en los acuerdos de no disponibilidad de créditos que resulten de aplicación en virtud del artículo 25 de la LOEPSF se aplicarán las siguientes condiciones:
- a) Los créditos afectados por la no disponibilidad deberán ser prioritariamente otros distintos a los relativos a la atención de servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales esenciales), definidos en el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
 - b) Compromiso de que únicamente podrán agotar la posibilidad de variaciones retributivas de su personal previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado aplicable, si las medidas adoptadas en el acuerdo de no disponibilidad resultan suficientes para cubrir la eventual diferencia entre el déficit efectivo 2017 y el objetivo fijado para el ejercicio en curso, así como para cubrir el mayor gasto que impliquen dichas variaciones retributivas.
9. Compromiso de Firma del convenio para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica para ganar eficiencia y reducir costes. Asimismo, la Comunidad Autónoma asume el compromiso de trabajar de forma activa en las siguientes actuaciones para mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos y reducir costes de funcionamiento:
- a) Adherirse al uso de las plataformas y registros para la gestión electrónica de los procedimientos facilitados por la Administración General del Estado. Particularmente, en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración.
 - b) Facilitar la integración de las Entidades Locales del territorio de esa Comunidad Autónoma en las plataformas, sistemas y soluciones tecnológicas estatales.
 - c) Integrar los registros de la Comunidad Autónoma en el Sistema de Intercambio de Registros, de manera que los intercambios se hagan sólo por medios telemáticos, sin movimiento de papel.
 - d) Utilizar los medios telemáticos para la obtención de datos, información y certificados que obren en poder de la Administración, para evitar que los tengan que presentar los ciudadanos. En especial, el compromiso de utilización de la Plataforma de intermediación, tanto para el consumo de los datos que necesite para la gestión de sus procedimientos administrativos como para poner a disposición en la plataforma de intermediación los datos, certificados y resto de documentación de competencia autonómica.

- 10.** En el caso de que la Comunidad Autónoma se encuentre en un supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública según el último informe disponible al que hace referencia el artículo 17.3 o 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Comunidad Autónoma no podrá aprobar modificaciones presupuestarias que conlleven aumento neto del gasto no financiero respecto del presupuestado para el ejercicio 2017 y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos. La inclusión de esta condición se encuentra íntimamente relacionada con la adopción de los acuerdos de no disponibilidad que quedarían desvirtuados si se habilitara la posibilidad de habilitar nuevos créditos presupuestarios que determinen aumento neto del gasto no financiero.
- 11.** En el caso de que la Comunidad Autónoma se encuentre en un supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública según el último informe disponible al que hace referencia el artículo 17.3 o 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se compromete a la remisión por el interventor general de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda y Función Pública por medios electrónicos y, en su caso, siguiendo el modelo que el citado Ministerio facilite, antes del día 30 de cada mes, de un informe elaborado por el órgano competente sobre el grado de cumplimiento previsto para el ejercicio corriente de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, así como sobre los riesgos y circunstancias que pudieran dar lugar al incumplimiento de cualquiera de dichos objetivos. Como parte de este informe también se incorporará información sobre la ejecución del acuerdo de no disponibilidad que se hubiera comunicado o acordado, así como el análisis de en qué medida los recursos que reciba la Comunidad Autónoma en el ejercicio corriente por ingresos del sistema de financiación o por la aplicación de las mejoras en las condiciones financieras de los préstamos relativos a los mecanismos de financiación, están contribuyendo a reducir el déficit.
- 12.** En el caso de que la Comunidad Autónoma se encuentre en un supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública según el último informe disponible al que hace referencia el artículo 17.3 o 17.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se compromete a la remisión por el interventor general de la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda y Función Pública de un informe elaborado por el órgano competente sobre la

valoración del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública respecto al anteproyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

- 13.** Compromiso de que las eventuales desviaciones del déficit en que pudieran incurrirse respecto a los objetivos de estabilidad, sean parcialmente compensadas por los presupuestos de ejercicios posteriores de la comunidad, compensando dichas desviaciones con menores gastos o mayores ingresos, sin que por tanto la financiación por el Fondo de Liquidez Autonómico de estas desviaciones pueda alcanzar la totalidad del importe ni superar el porcentaje que decida la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en atención a la naturaleza y causas por las que pudiera haberse producido esta desviación.
- 14.** Haber dado de alta en facturación electrónica todas las unidades tramitadoras de la Comunidad Autónoma obligadas por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas FACe.
- 15.** Garantizar el acceso y verificación al buzón de entrada de registros electrónicos, de manera que el tiempo de confirmación de la correcta recepción en los envíos en los registros no sea superior a cinco días hábiles, en todas las oficinas ya integradas en el Sistema integrado de registros (SIR).
- 16.** Especificación en la plataforma de intermediación de datos del servicio que provea el certificado de “Estar al corriente de pagos de obligaciones tributarias” y el evento vital de “Cambio de Domicilio”. Compromiso que se mantendrá incluyendo cada trimestre en la plataforma de intermediación al menos un certificado o dato de competencia autonómica o un evento vital, en los términos que se acuerden en la comisión sectorial de administración electrónica.
- 17.** Registrar en el Sistema de Información Administrativa (SIA) y mantener actualizado todos los procedimientos y trámites para ofrecer la información de forma armonizada y normalizada en el Punto de Acceso General (PAG).
- 18.** La Comunidad Autónoma adoptará los códigos de error para los puntos de entrada de facturas electrónicas y de los registros contables de facturas según el documento de códigos acordado en el Foro de Factura Electrónica que preside el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

- 19.** La Comunidad Autónoma contará con la digitalización plena de los registros enviados, en los términos previstos en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todas las oficinas ya integradas en SIR.
- 20.** La Comunidad Autónoma habrá completado la integración en SIR y la carga en el directorio DIR3 de la información de todas las oficinas de asistencia en materia de registros de la Comunidad Autónoma.
- 21.** La Comunidad Autónoma adoptará y publicará la política de Gestión de Documentos de la Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Política de Gestión de Documentos (Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas), acorde con el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica), en la que se incluyan los Esquemas de Expediente, Documento y estructuras de Metadatos Complementarios acorde a como se publiquen en el Portal de Administración Electrónica.
- 22.** La Comunidad Autónoma pondrá a disposición del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado, de manera interoperable, la información del estado de tramitación de los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos de su ámbito de competencias, para que pueda ser consultada por el interesado.
- 23.** La Comunidad Autónoma adoptará las recomendaciones de la IGAE sobre la utilización de determinados datos de referencia en la factura según el documento acordado en el Foro de Factura Electrónica que preside el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- 24.** La Comunidad Autónoma integrará en SIR todas las Direcciones Generales, organismos públicos y entidades que conformen el sector público institucional Autonómico.
- 25.** La Comunidad Autónoma cumplirá lo previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en cuanto a que el único Formato estructurado de la factura y firma electrónica utilizado sea Facturae, versión 3.2.

- 26.** La Comunidad Autónoma permitirá la realización de factoring de la factura electrónica, implementando la completa tramitación electrónica del factoring en favor del cesionario y posibilitando al cesionario, en cualquier momento, la consulta de estado de tramitación de las facturas del cedente.
- 27.** Permitirá la identificación y firma electrónica mediante el sistema Cl@ve en los servicios de las sedes electrónicas de ámbito autonómico. Antes de octubre de 2017 los sistemas de información principales, y en todo caso, el punto de acceso general autonómico o equivalente, permitirá que los ciudadanos se relacionen con él a través de la plataforma compartida cl@ve. Igualmente, en las oficinas de registro y atención al ciudadano de la Comunidad Autónoma, los ciudadanos se podrán registrar en el sistema cl@ve.
- 28.** Pondrá las notificaciones y comunicaciones emitidas por la Comunidad Autónoma a disposición de los interesados en su punto de acceso general. Para ello puede usar la dirección electrónica habilitada única, gestionada por la Secretaría General de Administración Digital y, en todo caso, permitirá el acceso a las mismas de los interesados a través del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (PAG), "administración.gob.es". Para ello, se compromete a cumplir lo siguiente:
- a) Los interesados podrán conocer a través del PAG si tienen notificaciones pendientes emitidas por la Comunidad Autónoma.
 - b) Los interesados también podrán acceder al contenido de dichas notificaciones pendiente en el propio PAG con plenos efectos jurídicos.
 - c) Si la Comunidad Autónoma dispone de un Punto de Acceso General propio con servicio de consulta de notificaciones, facilitará al interesado tanto las notificaciones que le haya emitido como las que tenga pendientes en el resto de Administraciones Públicas, incluidas las de la Administración de Justicia, interoperando para ello con el PAG.
- 29.** Impulsarán la comunicación electrónica de los nacimientos que se produzcan en los centros sanitarios de su Comunidad Autónoma a las distintas Administraciones Públicas que tengan que conocer de los mismos (proyecto ANDES). Los destinatarios de esta información se irán integrando gradualmente, desde los registros civiles al resto de órganos y organismos con competencias que exijan del conocimiento de los nacimientos, para que actualicen sus sistemas automáticamente y actúen de manera proactiva. Para ello, se compromete a cumplir lo siguiente:
- a) Identificará los órganos autonómicos que requieren incorporar los nacimientos (por ejemplo, sanidad).

- b) Especificar la información y actuaciones a realizar para comunicar electrónicamente desde el propio centro sanitario los datos necesarios para que estos órganos puedan ejercer su competencia sin necesidad de asistencia de los ciudadanos.
 - c) La comunicación electrónica de los nacimientos desde los centros sanitarios provocará los efectos jurídicos y documentales equivalentes a las que actualmente se realizan de manera aislada frente a cada organismo.
- 30.** Permitirá a través de la sede del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado (área personal) la descarga de los certificados correspondientes a la condición de familia numerosa y a la condición de discapacidad.
- 31.** Permitirá que sus documentos electrónicos puedan ser cotejados mediante el Código Seguro de Verificación por los interesados en la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.
- 32.** Permitirá a través de la sede electrónica del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado (área personal) el acceso y consulta de su información sanitaria mediante la incorporación de la funcionalidad del acceso del ciudadano prevista en el proyecto de Historia Clínica del Sistema Nacional de Salud, como un punto de acceso adicional al que actualmente se presta en los Servicios Sanitarios de las CCAA.
- 33.** Realizará los intercambios de documentos y expedientes electrónicos a través del punto general de intercambio mediante el servicio compartido “infraestructura y sistemas para el documento electrónico” (INSIDE), de la Secretaría General de Administración Digital, tanto para enviar como para recibir. En el caso concreto de intercambios con los órganos judiciales y tratándose de una Comunidad Autónoma de competencia transferida con sistema propio de gestión judicial deberá interoperar con INSIDE para recoger los expedientes administrativos que les sean enviados a sus órganos judiciales.
- 34.** La Comunidad Autónoma aplicará las recomendaciones que se formulen por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación al tratamiento contable de los gastos devengados que se encuentren pendientes de aplicación a presupuesto y remitirá la información adicional que en relación a dicho gasto devengado se solicite específicamente por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

- 35.** En el caso de que la Comunidad Autónoma no hubiere adaptado su Plan General de Contabilidad Pública al Plan General de Contabilidad Pública aprobado, con el carácter de plan contable marco para todas las Administraciones Públicas, por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de Abril, se llevará a cabo su adaptación en los plazos y con el procedimiento que establezca en su caso el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- 36.** La Comunidad Autónoma dispondrá de una interconexión completa y efectiva entre la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma y la Plataforma de Contratación del Sector Público, que garantice el libre acceso a toda la información contractual que obre en la Plataforma de la Comunidad autónoma. Alternativamente, si la Comunidad Autónoma no dispone de Plataforma de Contratación, deberá garantizar que los órganos de contratación de la administración autonómica y los de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, publiquen toda la información contractual preceptiva en la Plataforma del Sector Público. Las aplicaciones que permitan la explotación de los datos de las Plataformas asegurarán que España pueda cumplir con las obligaciones de información cuantitativa que la Directiva 2014/24/UE establece, para su traslado a la Comisión Europea, permitiendo la agregación de la información por la Plataforma de Contratación del Sector Público.
- 37.** Las Comunidades Autónomas adoptarán una estrategia de racionalización de la contratación orientada a la agregación de la demanda, con el fin de obtener economías de escala y reducir los costes de las transacciones. Las medidas para ejecutar esta estrategia utilizarán los instrumentos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para adquirir obras, servicios y suministros mediante Acuerdos Marco y Centrales de Compra, gestionados por la Comunidad Autónoma o mediante la adhesión de la misma a los instrumentos análogos del Sistema Estatal de Contratación Centralizada.
- 38.** Las Comunidades Autónomas adoptarán por medio del correspondiente Acuerdo, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las entidades del sector público estatal a determinados contratos no sujetos a regulación armonizada.
- 39.** Antes del 15 de marzo y del 30 de septiembre de cada año, la Comunidad autónoma remitirá la información relativa a los efectivos de la totalidad de su sector público a 1 de enero y a 1 de julio, respectivamente, a la Secretaría de Estado de Función Pública en los términos que ésta establezca, con el fin de

disponer de una imagen lo más completa posible de los efectivos del conjunto de las Administraciones Públicas.

- 40.** Adhesión al Convenio de colaboración suscrito por la Administración General del Estado con Farmaindustria el 29 de diciembre de 2016, conforme al procedimiento de adhesión que se establezca, así como a sus posteriores renovaciones cuando las mismas sean acordadas.
- 41.** Adhesión al convenio marco para el desarrollo del programa de salud y bienestar social de la agenda digital para España en el ámbito del sistema nacional de salud y firma de las adendas de los convenios trilaterales.
- 42.** Adhesión al Convenio marco de colaboración para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de centros docentes españoles.
- 43.** Antes del 30 de abril de cada año, la Comunidad autónoma deberá facilitar a través del sistema ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración) la información relativa a los efectivos y retribuciones de los distintos colectivos de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos dependientes, en los términos que se establezca por la Secretaría de Estado de Función Pública, con el fin de disponer de una información precisa del marco retributivo del personal que presta servicios en el conjunto de las Administraciones Públicas.